

Punta Arenas, siete de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos antecedentes RIT 38-2024, RUC 2300044780-3, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, absolvió a Juan Herminio Luna Pardo y Claudio Marcelo Barría Navarro de la imputación del Ministerio Público, en que se le sindicaba como autores del delito de homicidio simple en grado de consumado, perpetrado el 09 de enero de 2023.

En contra de esta sentencia, recurre de nulidad doña Johanna Irribarra Alarcón, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego, invocando como causal de nulidad la contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es, que en la sentencia recurrida se ha omitido el requisito contemplado en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 297 del mismo cuerpo legal, respecto del hecho constitutivo del delito de Homicidio Simple, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal.

Expone, que el Ministerio Público imputó cargos y acusó a los imputados atribuyéndole a ambos, participación criminal a título de autores de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 N°1 del código punitivo.

Refiere, que la teoría del caso del Ministerio Público discurrió sobre la base de la acreditación de la existencia del delito imputado y la participación de los acusados de los mismos; todo aquéllo fundado en los medios probatorios expuestos en el juicio, consistente en prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba, tanto directa e indiciaria, ésta última con el mismo valor que la prueba directa, y que mediante un proceso de inferencia probatoria a partir de indicios, permite establecer la presencia de los imputados en el lugar de los hechos, de su participación, y de la dinámica en que estos ocurrieron logrando a través de ellos la verdad jurídica de lo ocurrido a la víctima.

Indica, que por su parte la defensa argumentó que los imputados pudieron haber cometido el delito de lesiones en la persona de la víctima, pero no así el de homicidio, pues

reconocen una agresión ilegítima y culpable, pero discurren en que dicha agresión es de una entidad menor que no pudo ocasionar el deslace señalado, esto es la muerte.

Precisa, que recurre conforme a la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) pues la reflexión efectuada sobre la prueba rendida en el juicio oral, para dar por establecido el hecho punible y la participación de los acusados no cumple con la metodología del artículo 297 del Código Procesal Penal ni con el estándar del artículo 340 del mismo cuerpo legal, lo que se traduce en que el fallo recurrido no cumple a cabalidad con los requisitos que le impone la letra c) del artículo 342 del indicado cuerpo legal.

Explica, que en consonancia con el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal, el artículo 297 inciso 1° establece que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la Lógica, las Máximas de la Experiencia y los Conocimientos Científicamente Afianzados.

Afirma, que, en cuanto a las infracciones, la sentencia no resulta clara, lógica ni completa. Que como primera cuestión resulta de especial importancia destacar que toda sentencia, sea absolutoria o condenatoria, debe contener una exposición Clara, Lógica y Completa, tanto de los hechos que se dan por acreditados, como de la forma en que se han valorado los elementos probatorios para establecer racionalmente los mismos. Asimismo, la fundamentación debe permitir el entendimiento pleno del razonamiento y sus conclusiones.

Refiere, que en el caso de marras el fallo no satisface estas exigencias, su exposición no es clara, lógica ni completa, a partir del razonamiento aplicado para desestimar los indicios planteados por el Ministerio Público para lograr acreditar el hecho punible y la participación de los acusados con el estándar de convicción establecido en la ley.

Indica, que por ser la causal invocada, motivo absoluto de nulidad, y como causal objetivada de infracción de garantías, se presume el perjuicio causado al recurrente.

Así las cosas, el hecho que el tribunal no haga una relación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados o no probados, y carente de una valoración razonada en relación con los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo a las reglas del artículo 297 del Código Procesal Penal, se verifica en definitiva una vulneración de las garantías procesales expuestas y el perjuicio no admite prueba en contrario.

Solicita, se acoja en todas sus partes el presente recurso, disponiendo la anulación del juicio oral en su totalidad y de la sentencia recurrida, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordene la remisión de los autos al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, sala no inhabilitada, que deba conocer del nuevo juicio oral, por constituir la única manera de subsanar el perjuicio causado al Ministerio Público por el fallo recurrido.

La vista del recurso se efectuó en audiencia pública del dieciocho de julio de dos mil veinticuatro con asistencia de la Fiscal del Ministerio Público doña Johanna Irribarra Alarcón, y del Defensor Penal Público don Paulo González Sánchez, los que expusieron lo conveniente a sus derechos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que doña Johanna Irribarra Alarcón, Fiscal Adjunta de Tierra del Fuego recurre de Nulidad, invocando como causal la contemplada en el artículo 373 letra e) del Código Procesal Penal, esto es cuando en la sentencia recurrida se ha omitido el requisito contemplado en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 297 del mismo cuerpo legal. Fundamentándola expone: que el Ministerio Público imputó cargos y acusó a los imputados atribuyéndole a ambos, participación criminal a

título de autores de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 N°1 del código punitivo.

Refiere, que la teoría del caso del Ministerio Público discurrió sobre la base de la acreditación de la existencia del delito imputado y la participación de los acusados en los mismos; todo aquéllo fundado en los medios probatorios expuestos en el juicio, consistente en prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba, tanto directa e indiciaria, esta última con el mismo valor que la prueba directa, y que mediante un proceso de inferencia probatoria a partir de indicios, permite establecer la presencia de los imputados en el lugar de los hechos, de su participación, y de la dinámica en que éstos ocurrieron logrando a través de ellos la verdad jurídica de lo ocurrido a la víctima.

Indica, que por su parte la defensa argumentó que los imputados pudieron haber cometido el delito de lesiones en la persona de la víctima, pero no así el de homicidio, pues reconocen una agresión ilegítima y culpable, pero discurren en que dicha agresión es de una entidad menor que no pudo ocasionar el deslace señalado, esto es la muerte.

Precisa, que recurre conforme a la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) pues la reflexión efectuada sobre la prueba rendida en el juicio oral, para dar por establecido el hecho punible y la participación de los acusados no cumple con la metodología del artículo 297 del Código Procesal Penal ni con el estándar del artículo 340 del mismo cuerpo legal, lo que se traduce en que el fallo recurrido no cumple a cabalidad con los requisitos que le impone la letra c) del artículo 342 del indicado cuerpo legal.

Explica, que en consonancia con el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal, el artículo 297 inciso 1° establece que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la Lógica, las Máximas de la Experiencia y los Conocimientos Científicamente Afianzados.

Afirma, que, en cuanto a las infracciones, la sentencia no resulta clara, lógica ni completa. Que como primera cuestión resulta de especial importancia destacar que toda sentencia, sea absolutoria o condenatoria, debe contener una exposición clara, lógica y completa, tanto de los hechos que se dan por acreditados, como de la forma en que se han valorado los elementos probatorios para establecer racionalmente los mismos. Asimismo, la fundamentación debe permitir el entendimiento pleno del razonamiento y sus conclusiones.

Refiere, que en el caso de marras el fallo no satisface estas exigencias, su exposición no es clara, lógica ni completa, a partir del razonamiento aplicado para desestimar los indicios planteados por el Ministerio Público para lograr acreditar el hecho punible y la participación de los acusados con el estándar de convicción establecido en la ley.

Indica, que por ser la causal invocada, motivo absoluto de nulidad, y como causal objetivada de infracción de garantías, se presume el perjuicio causado al recurrente.

Así las cosas, el hecho que el tribunal no haga una relación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados o no probados, y carente de una valoración razonada en relación con los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo a las reglas del artículo 297 del Código Procesal Penal, se verifica en definitiva una vulneración de las garantías procesales expuestas y el perjuicio no admite prueba en contrario.

SEGUNDO: Que se ha invocado por el Ministerio Público como causal la contemplada del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, que establece que: El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia se hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letra c), d) o e). Que el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, dispone que la sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se

dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297. A su turno, el artículo 297 del mismo cuerpo legal señala que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

TERCERO: Que en el considerando séptimo del fallo se da cuenta de la prueba documental pericial y testimonial aportada por el Ministerio Público y se hace lo propio en el fundamento octavo con la prueba rendida por la defensa del acusado Barría Navarro, tanto testimonial como documental, pericial.

En el apartado noveno se da por establecido el siguiente hecho:

"El 10 de enero de 2023, a las 11:30 aproximadamente, funcionarios de Carabineros de Chile concurren al domicilio de calle Santos Mardones N°95 de Porvenir y en el sector destinado a cocina encuentran sobre un sofá el cuerpo sin vida de Marcelo Paillán Nahuelcar, quien residía en ese lugar, y que falleció según la autopsia que se le realizó producto de un traumatismo facio craneo encefálico grave complicado, asociado a un hematoma subdural agudo traumático hemisférico derecho. Según la misma pericia médico legal el cuerpo presentaba las siguientes lesiones: hematoma cuero cabelludo, equimosis frontal, hematoma bipalpebral bilateral, contusión nasal, fractura nasal, equimosis en región cigomática bilateral, equimosis, escoriaciones y herida contusa en pabellón auricular izquierdo, múltiples erosiones y escoriaciones en región geniana izquierda, equimosis tórax, múltiples equimosis en extremidades superior e inferior izquierda, compatibles con la acción de terceros y susceptibles de ser provocadas por elemento contuso.

Posteriormente al hallazgo del cuerpo y producto de las diligencias investigativas realizadas por la Brigada de Homicidios de la PDI desde la tarde del 10 de enero, **se**

detuvo a Jorge Brzovic Fuentes, Claudio Barría Navarro y Juan Luna Pardo, quienes estuvieron el día 9 anterior en horas de la tarde en compañía del fallecido y de otras personas bebiendo al interior del inmueble antes referido donde tras una discusión se produjo un altercado".

En el acápite décimo los sentenciadores dan por acreditado el delito de homicidio de Marcelo Alejandro Paillán Nahuelcar, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en grado de consumado, dando las razones para ello en los motivos undécimo y duodécimo, teniendo especialmente presente el testimonio de los funcionarios de Carabineros, Jonathan Becerra Vidal y Pablo Muñoz Ibarra; de la declaración de los funcionarios de la PDI Diego Díaz Charles, Matías Cabrera Vallejos y Ricardo Monson Toro, igualmente por la pericia planimétrica expuesta por don Sergio Núñez Urrea. También con el dicho de la médico legista María Bravo González, la que concluyó que la causa de la muerte fue un traumatismo facio cráneo encefálico grave complicado, asociado a un hematoma subdural agudo traumático hemisférico derecho, lesiones compatibles con la acción de terceros y susceptibles de ser provocada por elemento contusa correspondiente a golpes de puños y de pie de alta energía, y que pudieron haber pasado horas para la muerte de la víctima.

CUARTO: Que es útil consignar que en el fundamento décimo tercero los sentenciadores establecen que la conducta reprochable de los hechores fue perpetrada con dolo de matar, al haberse materializado su intervención con golpes de pie y puño, señalando los hechos objetivos de la causa y altamente indiciarios de una conducta dolosa, refiriéndose igualmente a la relación de causalidad entre las conductas lesivas y el resultado mortal, consignándose **que el medio idóneo utilizado para la comisión del delito, en la especie lo fueron los golpes de pie y puño que se propinaron al ofendido,** y que en decir de la médico legal no ocurrió por alguna caída ni por la ingesta alcohólica de la víctima, no obstante ser un individuo alcohólico crónico.

QUINTO: Que también es útil traer a colación que se desprende del considerando cuarto que la defensa del acusado Claudio Barría Navarro solicitó la recalificación de los hechos imputados a un delito de lesiones y la dictación de un veredicto absolutorio por el delito de homicidio, **reconociendo que lo único que existió fue una pelea con lesiones.** A su turno el abogado de Juan Luna Pardo, según da cuenta el fundamento quinto, en el alegato de cierre asumió como posible **la versión que dice que hubo un ataque o una pelea a las 23 horas.**

SEXTO: Que de la lectura del fundamento sexto se puede concluir que Claudio Barría Navarro y Juan Luna Pardo reconocen que estaban tomando en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde resultó muerto la víctima.

SÉPTIMO: Que por otro lado Juan Segundo Queipur Huenchur declara como testigo presencial presentado por la Fiscalía según se desprende del considerando séptimo 4., reconociendo que vio cuando mataron a paillita, vio como le pegaban en la parte de la cabeza, le molieron el cráneo de tanto darle golpes, primero fue Barría y después lo agarró Pardo. A su turno la testigo Soraya del Carmen Colipichún Andrade reconoce que Pardo le pegó dos palmazos a Paella y patapela le pescó conversa y lo llevaron a la pieza y le pegaron ahí con Brsovic, quien pescó un palo y lo llevaron a la pieza, en donde le pegaron.

OCTAVO: Que es del parecer de estos sentenciadores acoger el Recurso de Nulidad planteado por el Ministerio Público por la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación con el artículo 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, toda vez que el fallo, no obstante la existencia de múltiples indicios como las ya referidos, su fundamentación no permite la reproducción del razonamiento empleado por los jueces para alcanzar la conclusión absolutoria a lo que se llegó.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 372, 374 letra e), y 384 del Código Procesal Penal, **SE ACOGE** el recurso de nulidad

interpuesto por la Fiscal Adjunta de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego doña Johana Iribarra Alarcón, en contra de la sentencia de fecha 17 de junio de 2024, dictada en causa RUC N°2300044780-3, declarándose nula la misma y el juicio oral que la precedió, debiendo procederse a realizar nuevo juicio ante Tribunal no inhabilitado.

Regístrese, notifíquese y agréguese a la carpeta digital.

Redacción de la Ministra Srta. María Isabel San Martín Morales.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña Caroline Turner González, no obstante haber participado en la vista y el acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol N°235-2024 PENAL.